

TRIBUNALES

Caratulado:

**LORCA/PRODUCTOS DE ALAMBRE
PRODALAM S.A.**

Rol:

O-113-2024

Fecha:	16-08-2024
Tribunal:	Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno
Materia:	Despido injustificado



Utilice una aplicación QR desde su teléfono para escanear este código y consultar la sentencia desde el sistema.

[Ir a Sentencia](#)

Osorno, dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En esta causa RIT O-113-2024 compareció don ÁLEX IVÁN LORCA BURGOS, desempleado, domiciliado en calle 18 de Septiembre N° 1065, Osorno, interponiendo demanda en contra de PRODALAM S.A., RUT 93.772.000- 9, representada por don Marcelo Sepúlveda Pulgar, Jefe Zonal, ambos domiciliados en calle Gustavo Binder N° 1183, Parque Industrial, Osorno. Ejerce acción de despido injustificado y cobro de prestaciones laborales. En cuanto a la relación laboral dice que se inició el 01 de septiembre de 2008. Se desempeñaba como vendedor de terreno y sus servicios consistía en la venta de materiales de construcción, tales como, OSB, vulcanita, mallas, vigas de acero, perfilería, entre otros. El contrato de trabajo tenía el carácter de indefinido. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, la remuneración ascendía a la suma de \$1.989.773. En cuanto al despido dice que el 07 de marzo de 2024, se le comunicó el término de la relación laboral a contar de esa misma fecha, fundado en la causal del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, esto es, las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, la que se habría configurado según el tenor de la carta de aviso de despido; transcribe los hechos. Invoca y transcribe el artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo. Dice que la comunicación de despido no cumple con los requisitos formales que exige el artículo 162 del Código del Trabajo, toda vez que, se limita a hacer referencia, de manera genérica, a un supuesto proceso de reestructuración de los servicios sin explicar o aclarar en qué consistiría y /o cómo se implementaría este supuesto proceso de reestructuración. Luego agrega que sus funciones serán redistribuidas, ajustándolas a las reales necesidades que tiene actualmente la compañía, lo cual no es efectivo, ya que, su cargo fue reemplazado por otro vendedor y, en consecuencia, los servicios que yo prestaba siguen teniendo lugar, se siguen desempeñando. Finalmente señala que su cargo no será reemplazado, lo cual, no es efectivo. Así, la demandada no explica por qué razón sería necesaria su separación o despido, si después de ocurrido, los servicios que yo prestaba siguen teniendo lugar, es decir, se siguen desempeñando por la vendedora de nombre

Ema. En consecuencia, la causal de despido invocada no se configura por lo que sería procedente que así se declare. A mayor abundamiento, hace presente que la verdadera razón por la cual fue despedido, obedece a que un cliente le encargó la confección de vigas de acero inoxidable, aproximadamente 14 mil kilos, lo que ocurrió la semana anterior de sus vacaciones (12.02.2024), por lo que dejó listo y preparado el requerimiento para que se encargue la fabricación de las vigas. Durante sus vacaciones el cliente le informó que requería cambiar la forma de las vigas que había encargado y le dije que espere a que vuelta de sus vacaciones (03.03.2024) para ver una solución. Así, tomó contacto con la fábrica encargada de su fabricación a objeto de paralizarla y ver qué hacer con el cliente. Ésta tomó contacto e informó de lo ocurrido al Jefe Zonal, don Marcelo Sepúlveda Pulgar, quien lo llamó molesto y le atribuyó la responsabilidad de lo ocurrido y le dijo que espere que vuelva de sus vacaciones para ver una solución. Al volver de sus vacaciones se encontré que su cargo estaba siendo desempeñado por doña Ema y posteriormente fue despedido y, en definitiva, las vigas se hicieron. Ahora bien, la carta de aviso de despido no señala hechos, virtud de lo cual, se hace ininteligible, no permite cuestionarla en cuanto a los supuestos hechos que se invocan para justificar el despido y, en consecuencia, sólo lo deja en indefensión. Invoca y transcribe el artículo 454 N° 1 inciso 2° del Código del Trabajo. Ello por sí solo hace procedente se declare injustificado el despido del que fue objeto ya que el empleador no podrá rendir probanzas respecto de eventuales hechos que podrían haber configurado la causal de despido que invoca. En consecuencia, la falta de formalidades habidas en la carta de aviso de despido, por una parte, y al no ser efectivos los hechos en que se funda el término de su contrato, por otra, conllevan a que no se configura la causal invocada, por lo que sólo cabría declarar injustificado y contrario a derecho el despido del que ha sido objeto. En cuanto al descuento del aporte empleador AFC dice que la empleadora descontó a la indemnización por años de servicio ofrecida en el finiquito (\$21.887.503) la suma de \$3.198.515 correspondiente al saldo de la cuenta individual por cesantía cuyas cotizaciones hizo (artículo 13 de la Ley N° 19.728), descuento que conforme lo ha resuelto la jurisprudencia judicial que cita no es procedente si el despido fundado en la causal de que se trata es declarado injustificado, por lo que procede sea condenada a restituirle tales valores. En cuanto al finiquito y reserva de derechos dice que el 05 de abril de 2024 se suscribió el finiquito ante la Inspección del Trabajo de Osorno. Según se da cuenta en dicho instrumento hizo reserva expresa en cuanto a reclamar y/o demandar las prestaciones y ejercer las acciones de qué

trata la demanda. En cuanto a las prestaciones demandadas, dice que con ocasión de la relación laboral habida con la demandada y del despido injustificado y contrario a derecho del que he sido objeto, se le adeudan las siguientes prestaciones: 1) incremento de un 30% de la indemnización por años de servicio (\$21.887.503) conforme a lo dispuesto por el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, ascendente a la suma de \$6.566.251; 2) descuento hecho a la indemnización por años de servicio por aporte de la empleadora en la AFC, ascendente a la suma de \$3.198.515. Así, el total de las prestaciones demandadas asciende a la suma de \$9.764.766, más reajustes e intereses. En definitiva tener por interpuesta demanda laboral por despido injustificado y de cobro de prestaciones laborales en contra de la demandada, acogerla a tramitación y, en definitiva, dar lugar a ella en todas sus partes, y declarar injustificado y contrario a derecho el despido del que fue objeto y condenarla al pago de la suma de \$9.764.766, más reajustes e intereses; con costas.

Al contestar la demanda, la demandada pide el rechazo de la demanda con costas. Se refiere a los antecedentes de la demanda. Contestando, niega y controvierte expresamente todos y cada uno de los hechos, y/o circunstancias que se contienen y exponen en el escrito de demanda, a excepción de aquellos que son reconocidos expresamente en el texto de esta presentación. Sin que importe un listado taxativo reconoce –en su caso y niega y controvierte -en especial- los siguientes hechos y circunstancias: a) no es efectivo que el despido del actor sea injustificado, indebido o improcedente, ya que existen necesidades de la empresa, conforme se acreditará; b) no es efectivo que se adeude prestación ya sea el recargo del 30% sobre los años de servicio. En cuanto a los antecedentes de hecho y el despido justificado. Prodalam S.A. es una empresa que por más de 40 años se ha desarrollado en la comercialización de distintos productos para variadas industrias, entregando soluciones en productos de Alambre, Cercos, Aceros, Refuerzos de Hormigón e Insumos, encontrándose a lo largo de todo Chile con una red de Sucursales. En cuanto a la demanda, el demandante ingresó a trabajar el 1° de septiembre del 2008 como vendedor. Las principales funciones que debía realizar era captar ventas a través de distintas visitas a clientes en terreno, con el fin de incrementar las ventas de la sucursal. El ex trabajador desempeñó sus funciones con normalidad hasta el 07 de marzo del 2024, fecha en la que se puso término a su contrato de trabajo por la causal del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, esto es, “necesidades de la empresa, establecimiento o

servicio”. Luego, las partes suscribieron el respectivo finiquito oportunidad en la cual se le pagó al actor la suma de \$22.253.938. El actor estampó reserva expresa de derechos. En cuanto a las necesidades de la empresa como es de público conocimiento, a contar del mes de octubre de 2019, la actividad económica de nuestro país sufrió un serio revés, cuestión que sólo empeoró a raíz de la pandemia y también incidió en la industria de la demandada. Ahora bien, tal como se explica en la carta de despido respectiva, Prodalam S.A. se vio en la necesidad de reducir la dotación de la sucursal Castro; transcribe la carta de despido. En marzo del 2024 la empresa decidió prescindir de un vendedor de terreno en la ciudad de Osorno, cargo que detentaba el demandante. En este sentido, se analizó que no era necesario contar con un vendedor de terreno en la ciudad de Osorno, por lo que se eliminó de la estructura de la sucursal un vendedor de terreno. En este sentido, la empresa a marzo del 2024 contaba con cuatro vendedores en terreno, siendo uno de ellos el actor, y se decidió eliminar un puesto de vendedor de terreno, quedando por consiguiente 3 vendedores de terreno en la empresa. Inserta el organigrama original. Esta decisión, se basó en la necesidad de reducir el costo en la sucursal, la cual presentaba menores resultados a otras sucursales, de forma tal que se optó por eliminar el cargo de vendedor de terreno. En consecuencia, tal como se indicó en la carta de despido, se procedió a reducir personal de su sucursal, siendo que gran parte de sus funciones fueron entregadas a los demás trabajadores de la sucursal, sin ser reemplazado. En consecuencia, no se trató de una situación arbitraria ni caprichosa, sino una verdadera reestructuración motivada por la necesidad de utilizar de forma eficiente los recursos de la empresa, considerando los resultados de la sucursal Osorno en relación a las otras sucursales de Prodalam. La decisión que debió tomar la compañía al alero de su facultad de dirección, control y administración, dice relación con la responsabilidad de garantizar la continuidad operacional de la misma, siendo competitiva en el mercado y la mantención de la mayoría de los puestos de trabajo. Fue así como lamentablemente, en atención a esta reestructuración, debió prescindir de los servicios del ex trabajador demandante, lo cual se ha basado en causas completamente objetivas, conforme se ha expuesto y promete acreditar en la audiencia respectiva. Hace presente que el despido el actor cumplió con todas las formalidades del artículo 162 del Código del Trabajo, conteniendo las cartas todos los hechos en que se fundamenta la causal de necesidades de la empresa. En cuanto al derecho, el artículo 161 del Código del Trabajo otorga al empleador la posibilidad de poner término unilateral al contrato de trabajo, invocando para ello la causal de

necesidades de la empresa. Lo que en el caso de autos se basa exclusivamente en la reestructuración de la sucursal, que derivó en el despido del demandante, tal como se expresa en la carta de despido. Las pretensiones del actor tendientes a que el tribunal estime el despido como injustificado, resultan absolutamente improcedentes, toda vez que la demandada ha invocado correctamente la causal legal, cuya aplicación no sólo se ajusta a derecho, sino que también a la realidad material existente en la empresa al tiempo del despido y que obedece a aspectos de reestructuración de la misma. De esta manera, si no existiera esta causal que posibilita el término de una relación laboral, en el caso de una reestructuración como la de autos; en la que la demandada se vio en la necesidad de despedir al demandante, se gozaría una suerte de inamovilidad en el empleo o fuero laboral, ya que nunca se podría despedir, lo que resulta del todo contrario a derecho, y atenta contra las facultades de mando y dirección, propias del empleador. La propia norma señala casos ilustrativos en los que operan las necesidades de la empresa, que pueden englobarse en aspectos de carácter técnico o de orden económico. En efecto, los casos contemplados en la ley apuntan a circunstancias económicas, financieras o tecnológicas, que se verifican sin la intervención de la voluntad del empleador. Los datos explicados con detalle en la carta de término de contrato dan cuenta de hechos de carácter objetivo que hicieron necesaria la aplicación de la causal, por motivos de carácter técnico y económico, que escapa a la voluntad de esta parte y en la que evidentemente no ha podido ni querido influir. En mérito de los antecedentes antes expuestos, el tribunal podrá apreciar que se puso término al contrato de trabajo del demandante por una causal objetiva, que no obedeció bajo ninguna circunstancia al arbitrio del empleador y siendo absolutamente necesario el despido. Invoca y transcribe jurisprudencia judicial. De conformidad a lo señalado, el tribunal podrá apreciar que la causal de terminación de contrato se encuentra correctamente aplicada, siendo plenamente procedente el despido y, por ende, completamente ajustado a derecho. Por otra parte, la carta enviada al actor se basta a sí misma, puesto que esta contiene todos los hechos de forma clara, los cuales fundamentan el despido. Es así como ésta explica la situación técnica de la empresa y la consecuente reestructuración que se ha debido implementar, por lo que efectivamente cumple con los requisitos de formalidad del artículo 162 del Código del Trabajo. En definitiva, siendo efectivas las necesidades de la empresa, dado a que existió un proceso de reestructuración, es que se encuentra plenamente justificado el despido de la demandante. Es por esto que corresponde rechazar la demanda de despido injustificado. Respecto a la

devolución del seguro de cesantía nada se adeuda por concepto de devolución de AFC. No es procedente acoger la devolución del descuento propuesto por la actora por cuanto el artículo 13 de la Ley N° 19.728 establece la procedencia de descontar de la indemnización por años de servicio, o imputar al pago de la misma, la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador más su rentabilidad, cuando el contrato termina por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo. Por su parte el inciso 2° del artículo 52 de la misma ley señala que en caso de despido injustificado el empleador debe proceder a pagar las indemnizaciones de igual manera, esto es, descontando el aporte del empleador a las eventuales indemnizaciones a que tenga derecho el trabajador. La ley no ha supeditado la procedencia del descuento de la AFC a la calificación jurídica del despido, no existiendo ninguna norma que prohíba el descuento, cuando el despido se declara improcedente. De esta forma la interpretación de una ley debe darse por su sentido más genuino según indica el artículo 23 del Código Civil que habla precisamente de que lo “favorable u odioso de una ley”, no puede ser lo que se tome en cuenta al momento de interpretar una norma. En ninguna parte de la ley se establece la obligación de restituir dicho descuento en caso de que con posterioridad el despido sea declarado injustificado como pretende el actor. De esta forma, el descuento por suma \$3.198.515 se encuentra plenamente ajustado a derecho. A mayor abundamiento, en caso de que se realizara esta interpretación extensiva que el actor pretende que el tribunal aplique, se estaría agregando una modalidad (condición) al descuento credo por la Ley 19.728 artículos 13 y 42, sin embargo, esto significaría olvidar que las condiciones deben ser expresas para entender su existencia y solamente pueden ser creadas por ley y por la voluntad de las partes en un instrumento privado. Siguiendo la lógica de lo anterior, hace presente que, en caso de que considere como procedente supeditar el descuento a la calificación del despido (condición), se vulneraría el artículo 7 inciso 2° de la Constitución Política de la República, debido a que la creación de una modalidad es competencia exclusiva del Poder Legislativo, mas no del Poder Judicial, ya que, como indica, las condiciones sólo pueden ser creadas de forma expresa y por ley. Destaca el fallo del Recurso de Unificación, dictado por la Corte Suprema, Rol N°11.905-2019 de fecha 3 de enero de 2020 en donde rechaza la solicitud de reintegro de la AFC, interpuesta por el recurrente. Conforme a lo dispuesto en la ley, procede que se efectúe el descuento del haber que correspondía al actor por concepto de indemnizaciones legales, la suma de \$1.657.574, por el aporte efectuado por la demandada en la

cuenta individual por cesantía del demandante. Este monto de dinero ingresó ya al patrimonio del ex trabajador, por lo que no corresponde pagarlo nuevamente, ello solo implicaría un enriquecimiento indebido del demandante, puesto que este monto descontado en el finiquito es pagado luego a través del seguro de desempleo. Donde la ley no distingue no corresponde al intérprete distinguir, y en este caso, a pesar de que el despido es justificado y por lo tanto tampoco procedería aplicar la devolución bajo el presupuesto de la demanda, la norma no ha dispuesto que el mencionado descuento esté supeditado a si la causal esté o no justificada, mediante una futura calificación que pueda efectuar un Tribunal, en forma posterior. Este descuento está autorizado por la referida norma antes de que el despido sea calificado como de justificado o no, y es así como ha quedado establecido de la propia disposición legal. Las sanciones deben ser de derecho estricto, esto es, deben estar expresamente contenidas en la ley, razón por la cual al no establecer la ley 19.728 en ninguna parte la obligación del empleador de restituir los fondos descontados de la indemnización por término del contrato del trabajador no hace procedente la pretensión de la parte contraria en este punto. En este mismo sentido, el legislador ya ha sancionado al empleador en caso de que el despido sea declarado injustificado, y tal sanción es la contenida en el artículo 168 del Código del Trabajo, sanción que corresponde únicamente al recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicios, y no adicionalmente la devolución del seguro de cesantía descontado por el empleador. Lo ya señalado ha sido reiterado y uniformemente fallado por nuestros tribunales de justicia: no procede la devolución del aporte del empleador al seguro de desempleo cuando el despido es declarado injustificado. Por todo lo anterior, solicitamos el rechazo de esta pretensión, toda vez que resulta improcedente a la luz de la ley sobre Seguro de Desempleo y del espíritu de la ley N° 19.728. Por tanto, y conforme el mérito de lo expuesto y lo preceptuado en las disposiciones legales citadas y en los artículos 452 y siguientes del Código del Trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Pide tener por contestada la demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones y, en definitiva, rechazarla en todas sus partes con costas.

En la audiencia preparatoria las partes no arribaron a conciliación.

En la audiencia de juicio la demandada acompañó los siguientes documentos: 1) carta de aviso de

término de contrato del demandante de 07 de marzo de 2024, junto con su comprobante de envío de Correos de Chile (folio 26); 2) acta de comparendo de conciliación de 05 de abril de 2024 (folio 29); 3) organigrama sucursal Osorno marzo-abril 2024 de Prodalam S.A. (folio 31).

La demandada rindió prueba testimonial consistente en la declaración de don Marcelo Antonio Sepúlveda Pulgar y don Alan Felipe Reyes González.

La parte demandante acompañó como prueba documental presentación de la vendedora Emma Mattassoglio (folio 17).

La demandante solicitó exhibición de documentos, la demandada cumplió la exhibición y la demandante acompañó los siguientes documentos exhibidos: 1) contratos de trabajo y anexos de los trabajadores (1) Adalberto Mora Guzmán, (2) Víctor Torres Aliaga, (3) Ángel Aguilera Huenulef y (4) Emma Mattassoglio (folios 35, 36, 37 y 38); 2) libro de remuneraciones, sucursal Osorno, de los meses de enero a marzo de 2024 (folios 39, 40 y 41); 3) copia o respaldo del registro en el sitio web de la Dirección del Trabajo o en la Inspección del Trabajo de Osorno de la contratación de doña Emma Mattassoglio (folio 42).

La demandante rindió prueba confesional consistente en la declaración de don Marcelo Antonio Sepúlveda Pulgar en representación de la demandada.

La demandante rindió prueba testimonial consistente en la declaración de don Carlos Marcelo Navarro Varas.

Las partes formularon observaciones a la prueba.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en la audiencia preparatoria las partes establecieron como hechos no controvertidos los siguientes:

- 1) Que al término del contrato de trabajo se devengó en favor del demandante \$21.887.503 por indemnización por años de servicios;
- 2) Que al suscribir finiquito el empleador descontó por aporte patronal AFC \$3.198.515;
- 3) Que la demandada cumplió con las formalidades del despido.

- 4) Que el demandante prestaba servicios de vendedor de terreno.

SEGUNDO: Que don Marcelo Sepúlveda Pulgar declaró en representación de la demandada para la prueba confesional pedida por el demandante, diciendo que es jefe zonal Osorno desde 1 de octubre de 2010. El demandante era vendedor y cuando el absolvente llegó ya estaba trabajando. En marzo de 2024 había 3 vendedores, Alex Lorca., Adalberto mora, Víctor Torres. Don Angelo Aguilera es asistente de ventas, su función es ayudar a los vendedores cuando no están en la sucursal para que los clientes sean atendidos, es vendedor de mesón. Si se toma al asistente de ventas había 4 vendedores como dice el organigrama. El demandante fue despedido el 8 o 9 de marzo de 2024. Doña Ema Matasoglio fue contratada como vendedora el 3 o 4 de marzo y con la expectativa de hacerse cargo de la nueva sucursal en la unión que aún no se abre por permisos administrativo. Actualmente después del despido del demandante hay 3 vendedores más el asistente de ventas. La cratera de clientes del demandante fue distribuida entre los 4 vendedores, entre la oficina de Osorno que atiende el vendedor de oficina y los otros 3 vendedores. Después del despido del demandante sigue habiendo 4 vendedores en la sucursal.

Declaró también como testigo de la demandada, diciendo que el demandante fue despedido por la baja en las ventas y como se está comportamiento el mercado y se decidió reducir el personal. Hay baja en las ventas, se distribuyeron funciones. En marzo se contrató a la señora Ema porque se iba a hacer cargo de la sucursal de la unión que está en proyecto de apertura. Estaba proyectada la apertura para abril de 2024 pero por trámites en la Municipalidad de la unión no han podido sacar los permisos y por eso sigue bajo su cargo en Osorno. La apertura de la sucursal de La Unión está proyectada para de diciembre de 2024.

TERCERO: Que la demandada rindió además prueba testimonial consistente en la declaración de don Alán Reyes González que dijo que es jefe de local de la demandada de la sucursal de Osorno. Conoce al demandante porque eran parte del equipo de trabajo, era vendedor de la sucursal. No sabe mucho del despido del demandante porque estaba de vacaciones. Reintegrándose de sus vacaciones pasó unos días y el demandante fue despedido. Lo despidieron por gestión “puede haber sido”. Antes del despido había 4 vendedores (vendedor de mesón, 2 vendedores de terreno y el demandante que era el tercer vendedor de terreno). Hoy hay 4 vendedores, los nombra. Ema fue contratada por el proyecto de la nueva sucursal en La Unión está prestando servicios en Osorno. La oficina de La Unión no está funcionando “está como provisorio” en el local de Osorno. Contrainterrogado dijo que cuando prestaba servicios el demandante había 4 vendedores, don Angelo Aguilera, don Víctor Torres y don Alan Lorca. Cuando fue despedido el demandante hay 4 vendedores y esta doña Ema supliendo las labores del demandante.

CUARTO: Que la demandante rindió prueba testimonial consistente en la declaración de don Carlos Navarro Varas dijo que conoce al demandante, lo conoció trabajando para la demandada, el demandante trabajando como vendedor lo atendía. El demandante no está trabajando, lo contactó el 2 de abril de 2024 le pidió una cotización y le contestó una señorita diciéndole que el demandante ya no trabaja y que ella estaba en reemplazo del demandante y le dijo que cualquier solicitud lo viera con ella.

QUINTO: Que como consta de la carta de despido acompañada (folio 26) el 7 de marzo de 2024 el empleador demandado puso término al contrato de trabajo con el actor, invocando la causal del artículo 161 inicio 1° del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa.

En cuanto a los hechos en ella se indica lo siguiente:

“Los hechos en que se funda la causal invocada consisten en un proceso de reestructuración de los servicios, que implican una reducción del personal de la compañía. En razón de lo anterior sus funciones serán redistribuidas, ajustándolas a las reales necesidades que tiene actualmente la compañía. En consecuencia, su cargo no será reemplazado”.

SEXTO: Que la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia ha establecido claramente que la causal de necesidades de la empresa invocada por el empleador demandado es una causal objetiva, cuyos hechos fundantes no puede depender de la voluntad del empleador; es decir, la ocurrencia de alguno de los hechos que en la norma se indican como ejemplos de sustentos fácticos para ella (racionalización, modernización) deben ocurrir como consecuencia de un hecho externo a la voluntad del empleador de manera de constituirse de ese modo en una necesidad para la empresa.

Como se aprecia en la carta de despido el empleador se limita a señalar la ocurrencia de un “proceso de reestructuración de los servicios” y las consecuencias que dicha reestructuración provocó en las labores que realizaba el demandante (reducción de personal, supresión de las funciones y no reemplazo de ellas). Nada dice respecto del hecho que causó la reestructuración que invoca como necesaria para la empresa.

SEPTIMO: Que la omisión que se advierte en el considerando precedente se expresa además en la resolución que recibió la causa a prueba (debido a la limitación del artículo 454 n°1 inciso 2° del Código del Trabajo) y en la falta de prueba relacionado con los hechos que obligaron al empleador a reestructurar reduciendo personal.

Dicha omisión es suficiente para declarar el despido del actor injustificado toda vez que corresponde al juez laboral analizar y resolver la justificación o no de la reestructuración que causa el despido de trabajadores; análisis que no es posible realizar por no haberse invocado hechos justificativos de la decisión de reestructurar, ni menos que la reducción de personal haya sido la manera adecuada de realizarla.

Por lo anterior el despido del demandante será declarado injustificado acogiendo la demanda en esta materia.

OCTAVO: Que como consecuencia de lo anterior el empleador demandado deberá pagar al demandante \$6.566.251 por recargo del 30% de la indemnización por años de servicio.

NOVENO: Que como consecuencia de la declaración antes indicada, el empleador demandada no se encuentra habilitado legalmente para realizar el descuento del aporte patronal de AFC; ello por cuanto el artículo 13 de la ley 19.728 discurre sobre la base de que el contrato de trabajo termine por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, cuestión que en la especie no ha ocurrido al declararse su falta de justificación.

En efecto, si bien el empleador invocó en la carta de despido como causal de término del contrato la contemplada en el inciso 1° de dicha norma, el trabajador debatió la concurrencia de ella y el tribunal en el presente juicio declarará que dicha causa no se encuentra justificada; por lo que el descuento del aporte patronal de AFC no es procedente y el empleador deberá restituirlo.

Por lo anterior la demandada deberá pagar al demandante \$3.198.515 por descuento improcedente de aporte patronal de AFC.

DECIMO: Que el resto de la prueba rendida en nada altera lo ya reflexionado.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 7, 8, 63, 161, 162, 168, 172, 173, 446, 452, 453, 454, 456 y 459 del Código del Trabajo; artículo 13 de la ley 19.728 se declara:

Que SE ACOGE la demanda interpuesta por don don ÁLEX IVÁN LORCA BURGOS, en contra de PRODALAM S.A, ambos individualizados, declarándose injustificado el despido de que fue objeto el demandante, ocurrido el 7 de marzo de 2024, condenándose al demandado a pagar al demandante las siguientes prestaciones laborales:

- 1) \$6.566.251 por recargo del 30% de la indemnización por años de servicio;
- 2) \$3.198.515 por descuento improcedente de aporte patronal de AFC;
- 3) A pagar reajustes e intereses de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo;
- 4) A pagar las costas del juicio, regulándose las personales en la suma de \$976.476.

Ejecutoriado que sea este fallo y para los efectos del artículo 13 de la ley 14.908 cúmplase por el

empleador con la retención de alimentos si ello fuere procedente, debiendo informar al tribunal el hecho de dicho cumplimiento y sus circunstancias, al dar cuenta de pago de las obligaciones establecidas en la presente sentencia.

RIT O-113-2024

Pronunciada por doña María Isabel Palacios Vicencio, Jueza Titular el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno.

RIT O-113-2024/JML

2